# Crítica de la ciudadanía y movimientos sociales urbanos<sup>1</sup>

# Sergio Tamayo<sup>2</sup>

### Resumen

La idea central de este trabajo es que la ciudadanía se ha convertido en un sujeto social, especialmente en las actuales realidades latinoamericanas. Ello explica las crecientes resistencias y reclamos en las principales ciudades de la región. Para discernir teóricamente la relación entre ciudadanía y movimientos sociales urbanos se desarrollan tres dimensiones analíticas. La primera es referida al sujeto de cambio; a partir de una crítica al marco neoliberal, se plantea la ciudadanía como una construcción social e histórica, producto de la lucha social. La segunda dimensión considera la relación Estadosociedad civil como un elemento definitorio de la ciudadanía, que se expresa en la formación de proyectos distintivos ciudadanos, con varios grados de maduración política e impacto social. La tercera dimensión plantea la asociación directa de las prácticas ciudadanas transformadoras con los movimientos sociales urbanos y la naturaleza de su nueva morfología.

**Palabras clave:** Crítica de la ciudadanía, movimientos sociales urbanos, sujeto social, proyectos de ciudadanía

#### Abstract

The key issue of this chapter points out citizenship as a collective actor that has become a subject of social transformation, especially in current Latin-American urban world. This explains growing resistances and grievances in main cities in the region. To discuss theoretically the relationship between citizenship and urban social movements, I explain three analytical dimensions. The first one refers the subject of social change: from a critique to neoliberal framework, I consider citizenship as both historical and social construction, and as a result of social struggle. A second dimension considers State-civil society relation as a definitive mechanism of citizenship, mirrored in the making of distinctive citizen projects, with large range-degrees of political maturity and social impact. The third dimension analyzes a direct association of transformative citizen practices with urban social movements and the nature of their new social and political morphology.

**Key Words:** Citizenship Critique, urban social movements, social subject, citizen projects.

#### 1. Obertura

Un comentario irónico entre dirigentes de organizaciones del movimiento social urbano en México, en la primera década del siglo XXI, señalaba la transformación del movimiento

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Este trabajo es un avance del Proyecto CONACYT No. 106080 del Área de Sociales y Economía Convocatoria 08-09, titulado "Participación ciudadana y manifestaciones públicas en La ciudad de México. Un análisis multidimensional"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Profesor-Investigador del área de Teoría y Análisis de la Política, Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, México; <a href="mailto:sergiotamayo1@prodigy.net.mx">sergiotamayo1@prodigy.net.mx</a>; blog: <a href="mailto:swww.sergiotamayo.wordpress.com">swww.sergiotamayo.wordpress.com</a>; agradezco la colaboración de Azucena Granados y Julio César Reyes en la asistencia de investigación

urbano popular (MUP), combativo y crítico de las décadas 70 y 80 del siglo pasado, en un MUP S.A. de C.V (sociedad anónima de capital variable), interesado ahora y fervientemente en la gestión de recursos y créditos para vivienda, sin un proyecto social y político alternativo que lo sustente. Su mutación se ha debido a la prominencia del dinero en la realidad contemporánea y al desmoronamiento de utopías sociales. Efectivamente, la nueva ola de la globalización-mundialización modificó el vínculo entre la sociedad civil y el Estado, pero esta relación no ha sido siempre ni en todas partes del todo homogénea. La gran transición económica y política, el paso de una crisis de modelo de desarrollo entre 1968 y 1988, y la consolidación de un modelo político neoliberal, inmerso también en una crisis política del antiguo régimen, se ejemplificó en México hasta el año 2000 con la alternancia electoral, aunque mucho antes en varios países de América Latina. Algunos analistas hemos considerado sin embargo que este paso no se dio de manera tersa, ni respetuosa, y menos tolerante, como los ideólogos del neoliberalismo han reducido la realidad, sino constituido por duras batallas sociales, en las cuales los movimientos sociales fueron ajustando y madurando estrategias y proyectos holísticos de transformación social y urbana. De tal forma, que si queremos ser justos con la morfología del MUP, debemos reconocer que no todos los movimientos limitaron su gestión en asistir a "la banca de segundo piso", sino que fueron reemplazando la reivindicación específica de tipo social y por condiciones materiales de vida, por un proyecto alternativo de ciudadanía, el derecho a una vida digna, y a la utopía de que otra ciudad es posible. De eso trata este capítulo.3

El neoliberalismo no ha sentado sus reales homogéneamente en Latinoamérica, sino de una manera desigual y combinada. Al punto que, para explicar los territorios del neoliberalismo en esta región, Emilio Pradilla (2009) retoma el concepto de desarrollo desigual y combinado tanto en términos comprensivos como empíricos, al analizar el impacto de las economías mundiales en amplios territorios, en las ciudades, en la desequilibrada relación rural-urbana, en los grandes desarrollos históricos y desiguales de los países en la región, y en su crítica a la globalización. Pensar desde esta perspectiva,

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es importante aclarar que en este capítulo -tal como fue inspirado en el formato general del **Seminario Internacional -"Teorías sobre la Ciudad Contemporánea en América Latina"** organizado en noviembre de 2011 en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, y al cual presenté una ponencia con el avance de este texto- se hace hincapié, con excepción de muy pocas referencias de otros lugares, al debate y la reflexión sobre ciudadanía y movimientos sociales con base en autores fundamentalmente latinoamericanos. Este ejercicio fue muy satisfactorio, pues permitió sustentar la discusión teórica desde una perspectiva "del Sur". En mi caso, me dejé llevar por este esfuerzo sugerente por observar y criticar nuestras propias realidades, aportando en lo posible, a la construcción de una teoría urbana propia.

puede ayudarnos a romper con los determinismos economicistas de la historia, así como refutar el dogmatismo y rigidez de la teoría estructuralista de la lucha de clases y en general de la lucha social. Los teóricos de este concepto sobre el desarrollo desigual y combinado<sup>4</sup> insisten en la existencia de un proceso combinado que se expresa en la interrelación entre las formas más modernas del capitalismo con las relaciones de producción más atrasadas. Eso pasa debido a las diferencias tanto en las condiciones regionales como en las conexiones históricas. Las mismas causas básicas (por ejemplo una crisis) pueden conducir a muy diferentes y aún opuestos resultados (por ejemplo, las rebeliones diferenciadas en Oriente Medio, el movimiento 15-M de los indignados en España, el movimiento de los Okupa en los Estados Unidos, durante el año 2011). Por eso, aunque los marxistas han sido a menudo acusados por adversarios ideológicos de negar, ignorar o subestimar las peculiaridades nacionales y regionales en favor de dogmas y leyes naturales e universales, no siempre ha sido de esta manera.

Desde este marco introductorio abro una primera hipótesis de explicación teórica, que enlaza ciudadanía con los movimientos sociales. Esta suposición dice que los cambios en la estructura socio-económica y política traen aparejadas fuertes transformaciones en el ejercicio de la ciudadanía y en la formas de participación. El asunto estriba en que los efectos de esta determinación estructural, no son del mismo sentido en todas las regiones, ni en todas las ciudades, ni en todos los sectores sociales. Por eso algunas organizaciones sociales se han convertido en efecto en una especie de "sociedades anónimas de capitales variables", y otras han invertido en capitales más bien políticos y culturales, generando discursos de resistencia y alternativos de diverso tipo y grado de radicalidad.

Si nos ubicamos desde la perspectiva de los cambios estructurales, existen dos problemas fuertes que atraviesan a toda la región. El primero es el significado de la pobreza y las desventajas bajo condiciones de economías abiertas y altamente urbanizadas, que se han convertido en mecanismos causales de la nueva organización del trabajo, cambios en el índice de ocupación, del sector manufacturo a una mayor generación en el de servicios, inseguridad laboral y reducción de empleos estables. Es en la esfera económica donde mayor desigualdad se ha producido. Varios estudios sobre

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> George Novack, marxista estadounidense y amigo de León Trotski, a quien se le atribuye una minuciosa reflexión del concepto, publicó un análisis detallado sobre "La Ley del Desarrollo Desigual y Combinado en la Sociedad", véase en <a href="http://www.nodo50.org/ciencia\_popular/articulos/Novack.htm">http://www.nodo50.org/ciencia\_popular/articulos/Novack.htm</a>, fecha de consulta: 01 de septiembre de 2011.

disparidad muestran que la reducción de la pobreza no ha significado necesariamente reducción de los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, por ejemplo, situación esta que había caracterizado a la región en el periodo anterior.

El segundo gran tema es la evidencia que los cambios en la naturaleza del Estado modifican su relación con sus ciudadanos. Los Estados, señalan algunos estudios, descentralizan las responsabilidades y subcontratan a organismos del sector privado u ONGs para implementar programas y entrenar a "ciudadanos" para enfrentar los desafíos del mercado laboral. Los profesionales tecnócratas de las dependencias locales y organismos civiles privados se convierten en la implementación eficiente de estos programas ¿Cómo impactan estas nuevas prácticas profesionalizantes de los gobiernos en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos? ¿Estimulan nuevas relaciones con ciudadanos, de tal forma que incrementen la participación en las decisiones? (Alfie, Azuara, Bueno, Pérez y Tamayo, 2010; Wood y Roberts, 2008). La respuesta NO es categórica. Lo cierto es que el neoliberalismo, como pensamiento hegemónico, se ha extendido a toda la región promoviendo una postura promotora de la individualización de derechos y responsabilidades, sea en la esfera del mercado o en el comportamiento político y social. Así, los gobiernos enfatizan con mucha frecuencia las responsabilidades ciudadanas, mientras que los ciudadanos acentúan los derechos, apoyados éstos últimos por algunas ONG. Pero existe, en este complejo proceso una cooptación sistemática de estos organismos civiles por medios gubernamentales, lo que provoca una consistente pérdida de independencia política de tales organizaciones de la sociedad civil como promotores de derechos ciudadanos. (Cf. Foweraker, en Wood y Roberts, 2008; Roberts, 2010).

La descentralización de las actividades del Estado ha descentralizado también la acción de los movimientos sociales y ciudadanos ¿Cuál sería el interés político a nivel nacional que pueda movilizar a la gente, especialmente en estos tiempos en que supuestamente se reconocen en todas las esferas las libertades democráticas? ¿Cómo los movimientos basados en demandas locales particulares pueden escalar y ligarse con otros sobre bases regionales y nacionales de contenido político? El paso de la lucha social a la política se ha venido extendiendo en muchos movimientos sociales. Esto se da independientemente del resultado institucional y el grado de impacto obtenido. Las luchas por derechos y otras formas de acción colectiva siempre han sido numerosas en la realidad, pero los movimientos sociales no han logrado articularse en una visión común de cambio estructural. No obstante, hemos visto recientemente grandes movimientos

nacionalistas, populares y masivos, de resistencia al neoliberalismo en varios países de América Latina que han alcanzado un gran impacto en la sociedad.

Si esto es así, en el sentido que la globalización determina cambios en el comportamiento político, tenemos sin embargo una segunda hipótesis de explicación teórica que fija desde abajo las resistencias, experiencias de lucha y el desenvolvimiento de ideologías y utopías, que no pueden ser tampoco pensadas de manera homogénea ni totalmente determinables estructuralmente. Y este es el reto de la investigación en torno a la ciudad y la ciudadanía. El capitalismo, hemos visto, se desarrolla de manera desigual y combinada. La dinámica social, por lo tanto, no se distribuye análogamente en todas partes. Ahí es donde se expresan las grandes diversidades, los distintos localismos, los particularismos, las características propias de las identidades. Por eso globalización no puede ser sinónimo de homogenización, sino de diferenciación (lanni, 2006).

Aún así, el problema de tal diversidad de movimientos sociales y culturales, se encuentra en este cuestionamiento ¿qué tipo de resistencias, de luchas sociales son las definitivas para impactar y transformar las pesadas estructuras sociales? Desde el periodo neoliberal y las transiciones hacia la democracia, es la ciudadanía y la sociedad civil las elegidas para llevar a cabo tan espectacular empresa. En tal sentido, esta pregunta se hace pertinente ¿toda o qué parte de la ciudadanía?

Existe una visión de ciudadanía del tipo "posclasista" como la de Jesús Martín-Barbero (2003), que junto con otros autores ha sido categórico en esta dirección. Para el caso de las ciudades, dice este enfoque, la ciudadanía posmodernista establece que son las nuevas comunas urbanas el eje de un nuevo discurso fundacional de la acción colectiva, sustituyendo con ello la evidente parálisis sindical del movimiento obrero. Son nuevas culturas urbanas, que rompen la tradición de la identidad colectiva de tipo corporativa de los grandes sindicatos, y proponen nuevos modos de estar juntos. En la ciudad, continúa Barbero además de las culturas étnicas, conviven dos tipos de "indígenas" (a manera de las tribus de Maffesoli). El primer tipo es de aquellas tribus de lo que denomina "de la cultura oral" (del mundo urbano popular), que construye identidad a través de varias fuentes: de sus propias narraciones, chistes y refranes (*Cfr.* Vergara, 2006); de los relatos de la radio y el cine; del mundo de la música popular, que puede ir del vallenato al rock (Cfr. Vergara y Pérez, 2010). Un elemento crítico a destacar, es que en estas comunidades urbanas se ha venido dando una especie de refuncionalización dialéctica del machismo y de los usos de la religión, que se expresan de manera inédita a veces entre tipos de autoritarismo y la búsqueda de relaciones más horizontales (por el valor que tiene la solidaridad en estas comunidades). Son sin embargo resultado de la violencia que se hace y la que se sufre (violencia física y simbólica, vertical y social).

El segundo tipo de tribus urbanas es el que se genera de la cultura audiovisual e informática, la de los jóvenes de distintas clases, que han impulsado nuevos modos de socialización, que ya no se encuentra en la familia, ni la escuela, ni en los medios culturales tradicionales, sino en las nuevas tecnologías. Son nuevas culturas audiovisuales y electrónicas, nuevas comunas cibernéticas, nuevas formas de estar juntos. Son éstas nuevas culturas audiovisuales y electrónicas, nuevas comunas, nuevas formas de estar juntos, con una socialización basada en las redes cibernéticas, que no provienen de un territorio físico específico, sino de la edad y del género, de gustos comunes y estilos de vida (cf. Sánchez Medina, 2010/2011). La política como institucionalización de las relaciones de dominación se sale de sus discursos formales. La resistencia se plasma en el graffiti y en el rock, pero no formalizan espacios acotados para la lucha ni para el debate político. El rock se ha convertido, con sus contradicciones de violencia, machismo y religiosidad, en la capacidad discursiva de decir "nosotros" (Cfr. Vergara y Pérez, 2010).

Estas manifestaciones de las culturas urbanas evidencian en realidad que el vínculo entre esta época de grandes transformaciones institucionales y culturales, pone en duda la verdadera transición a la democracia, por lo menos en México, y el significado de la alternancia como salida a la crisis del régimen, desde arriba, desde la élite del sistema político. Pero también, el inmenso reto que implica construir una alternativa desde abajo para cambiar las asimétricas relaciones de poder en el que están, quiéranlo o no, entretejidas.

Esta descripción posmoderna de Barbero puede tener también una explicación política sobre el impacto de la restructuración capitalista. El modelo ajustado modificó el pacto social y modificó la ideología que lo sustentaba, y eso constituyó el descentramiento de los sujetos sociales (Touraine, 2005). Se añade otro componente, el que los movimientos del pacto anterior no han sido capaces de resistirse ni siquiera a la vorágine del neoliberalismo, sindicatos "charros", corporativizados, que cambiaron libertad sindical por sobreexplotación, un sindicalismo independiente que se corrompió y no alcanzó a erigirse como alternativa, organizaciones campesinas que le apostaron al productivismo y desplazaron la defensa de la tierra, un movimiento urbano popular que se mercantilizó y un feminismo que se orientó más a la competencia por cuotas y curules en el congreso

que a la lucha contra el patriacalismo en todas sus formas en los mundos de la vida (*Cf.* Rodríguez, 2001). ¿Es esta ciudadanía a la que asistimos?

La desintegración del antiguo pacto social puede considerarse como el aspecto político relevante que ha impuesto la constitución de un nuevo sujeto social en todo este periodo. Pero este nuevo sujeto ¿son en verdad las comunas urbanas de Barbero? ¿Son los líderes neocorporativizados de hoy? ¿Ciudadanos que se enfrentan a nuevos actores políticos poderosos? Rosa Albina Garavito (1996; 2010) se refiere a una multiplicidad de actores en una época en la cual el Estado se desliga de su base fundamental de la época populista, de los grandes sindicatos, de las centrales campesinas, de las organizaciones populares, y de la mediana burguesía nacionalista, para apoyarse mejor en las empresas transnacionales, los organismos internacionales, y otros "nuevos actores" como mafias y cárteles, cocaleros y movimientos étnicos, asociaciones urbanas, y guerrillas (*Cf.* Camou, 2001; Munck, 2003), y en la sociedad civil o la ciudadanía (*Cf.* Dagnino, Olvera y Panfichi, 2010; Tamayo, 2010).

En esta complejidad, difícil de categorizar o clasificar, no es un debate menor asociar el tema de la ciudadanía con los movimientos sociales urbanos y la política. La realidad latinoamericana se confronta con las constelaciones explicativas eurocéntricas y de la literatura estadounidense que han constreñido la dinámica de las resistencias a los esquemas de los nuevos movimientos sociales y al "posmarxismo" (*Cf.* Rodríguez Araujo, 2002). Este capítulo trata de ubicar otros fundamentos, a partir de la crítica de la ciudadanía.

La propuesta que presento en este trabajo se basa en tres supuestos. El primero es que la ciudadanía se ha convertido en un sujeto social, especialmente en las realidades latinoamericanas, pero no en el marco de lo que neoliberales y apologistas del neoliberalismo occidental lo han entendido, sino en la perspectiva en que la lucha de clases se fusiona sólidamente con las alternativas ciudadanas de manera compleja, dramática y contradictoria.

El segundo supuesto que considero en este capítulo es que la relación Estadosociedad civil se expresa con la formación de proyectos distintivos de ciudadanía; esta construcción social de aspiraciones ciudadanas se entreteje entre muy diversos grados de maduración política e impacto social. Por eso mismo, son estos proyectos los que reflejan las trayectorias de maduración del sujeto social. No obstante lo anterior ya que independientemente de la diversidad de los grados de gestación e impacto de los proyectos, éstos se confrontan entre sí, porque son discursos de poder, constituyendo así una especie de espacio de disputa, donde los actores se confrontan de forma no equilibrada, no recíproca, no equidistante, pues buscan a través de esa disputa por la nación, o por la ciudad, la hegemonía del poder. Es en ese proceso que se construyen a sí mismos como sujetos.

Finalmente, el tercer supuesto de esta formulación que vincula ciudadanía y movimientos sociales es que sobre la trama argumental de tal discusión teórica (sujeto social y proyecto político), se expone la articulación de prácticas ciudadanas transformadoras con los movimientos sociales urbanos, que a su vez explica la naturaleza de su nueva morfología.

## 2. La construcción de la ciudadanía como sujeto de cambio social

La discusión sobre el sujeto de cambio no es banal. La pregunta que enmarca es ¿quién o quiénes son los actores que promueven el cambio urbano, el cambio político, y de qué tipo de transformación se trata? Por un lado, los demócratas radicales hablan de nuevos movimientos sociales, ambiguos y sin pretensiones políticas. Por otro lado, algunas expresiones de la izquierda radical siguen manteniendo la postura de que la lucha de clases, a través del obrero industrial y del partido proletario, que se convierten en la orientación vanguardista de la revolución, es la única posibilidad real de transformación del sistema capitalista, caracterizado este por sus contradicciones internas, al que habría que destruir desde el campo de la economía y de la persistente reivindicación de necesidades materiales sociales.

En mi perspectiva, la ciudadanía puede constituirse en sujeto social, aunque el término de ciudadanía sea polisémico. Al menos una coincidencia explicativa de todas las corrientes, liberales o antiliberales, es que se define por ser eminentemente política, aunque lo problemático estribe después en definir ¿qué es la y lo político? Sin embargo, el punto aquí es que si para transformar aspectos relevantes del sistema o su totalidad, se requiere de una lucha política en esencia, que modifique las relaciones de dominación, los movimientos sociales tienen que transformarse en movimientos políticos con mira en el cambio, y no únicamente en el ajuste de sus carencias sociales al interior del sistema social. Las prácticas de la ciudadanía pueden conducirlos a este fin.

La ciudadanía puede entenderse entonces como proyecto o utopía, así como el resultado de la articulación de reivindicaciones civiles, políticas y sociales de sujetos sociales. Precisamente en este periodo, la ciudadanía ha permitido construir un sujeto que

se ha venido haciendo consciente de su capacidad de transformación global del estado de cosas vigente, porque se confronta críticamente al Estado-nación, en términos jurídicos y culturales. Pero no se queda en ese nivel, el sujeto-ciudadano se ha concebido como portador y actor inspirador de derechos que no se reducen a un solo campo de la acción humana, sino que se articula íntegramente con otros campos de lo económico y social, de lo civil y de las libertades individuales, así como de lo político y la participación. Esto es así, porque el hecho de ser ciudadano no significa la conversión de un actor que secuencialmente cumple su papel de votante para elegir a otros como representantes. como lo han caracterizado las teorías neoliberales en boga. Al contrario, si en efecto la ciudadanía es un proyecto de unificación y de nación, lo es también de cambio, porque es una práctica social y no un atributo jurídico inamovible. La ciudadanía así pensada le da contenido político al sujeto de transformación, le permite construir alianzas de clase y acuerpar discursivamente diferentes sectores sociales. Puede oponerse a otros proyectos de ciudadanía de grupos sociales elitistas o gubernamentales, y homogenizar utopías de otros grupos que puedan estar fragmentadas y desconectadas entre sí, y con ello cohesionarlas. El ciudadano pensado como un sujeto hegemónico es aquel que muestra vocación para agregar y unificar coincidencias, construyendo y consolidando identidades colectivas (Tamayo, 2010). No obstante, esta visión de ciudadanía rompe con la idea ineludible de imponer vanguardias ideológicas, porque aunque reconoce liderazgos y temas públicos de confrontación en momentos específicos, estos se construyen en el proceso de la participación, y no a través únicamente de los profesionales de la política.

Un ejemplo de este enfoque menos rígido y vertical, así como menos ambiguo e ingenuo, para comprender las oportunidades y límites de la ciudadanía, es precisamente el de los movimientos sociales urbanos y los cambios que generaron en la política y en la comprensión de la ciudad por distintos grupos, "tribus" y sectores urbanos. El proceso de cambiar lo pensado y percibido por este sujeto en formación fue experimentado durante periodos de transición. Uno el se inició en México en 1968 y concluyó al abrirse una nueva época a partir de 1988. Fue un movimiento que pasó de identificarse con una clase, la del proletariado y llegó a reconocerse con un sujeto más amplio, el ciudadano, cuya expresión colectiva concreta fue determinándose en el periodo de la globalización (Tamayo, 1999). Este periodo señalado, observó una tenaz correlación entre economía política y las luchas de resistencia. Sin embargo, para comprenderlo en sus justos términos, habría que modificar la perspectiva de ubicar a la clase obrera como sujeto central de alternativa al capitalismo. Rosalbina Garavito (1996) lo expone de alguna

manera al considerar el desmoronamiento del pacto social en el periodo de las economías latinoamericanas en función de la Sustitución de Importaciones, y su desplazamiento por otros actores de mayor impacto en las economías recientes ligadas a la globalización. El movimiento obrero fue perdiendo su centralidad (Méndez y Quiroz, 2011). Pero, no obstante lo anterior, es importante subrayar que eso no significa tampoco que tengamos que asumir la vacía explicación con lo que se ha asumido como los "nuevos" movimientos sociales" y nuevos actores que "han venido a sustituir" la acción de los sindicatos. A diferencia de este enfoque, la lucha de clases continúa, pero sobre otras bases. A este respecto, me parece pertinente establecer que en realidad el movimiento obrero, quizá por el fuerte control que el Estado y las burguesías le impusieron comprando y manipulando a sus líderes, nunca fue hegemónico en cuanto al papel del sujeto revolucionario. Más bien fue uno pasivo políticamente y de ideología chovinista (*Cfr.* Méndez y Quiroz, 2011). Y lo sigue siendo. Tatiana Coll (2011) es contundente cuando en un debate sobre lo nuevo y lo viejo de las izquierdas latinoamericanas afirma:

"El primer hecho histórico que tiene que acabar de asumir plenamente la izquierda latinoamericana, sobre todo, con todos sus significados e implicaciones, teóricas y prácticas, es el hecho contundente de que todas las revoluciones fueron "orilleras" como nos dice Bartra, fueron hechas en los países del subdesarrollo y la dependencia colonial, en las condiciones que esta matriz socio-política y económica impusieron. Este es un hecho histórico que debería de entrada evitarnos reeditar las obtusas discusiones en torno al sujeto histórico del cambio y las vías únicas de la revolución, los intentos por disfrazar a los campesinos y estudiantes como proletariado, y otras muchas deformaciones que aún enturbian los debates" (Coll, 2011: 30).

En efecto, Armando Bartra (2009, 2010) señala la importancia del movimiento campesino y sus transformaciones que lo hacen hacia finales del siglo pasado consolidar un nuevo tipo de organización rural más democrática y eficaz. Se van articulando aunque de manera heterogénea y desigual programas de reivindicación tipo "miscelánea", buscando la formación de redes de organización regional con autonomía local, donde la ciudadanía social sigue siendo fundamental, pero va cobrando fuerza la incidencia política entendida como el esfuerzo para cambiar el rumbo de las instituciones, estrategias y programas públicos. Y en los sectores indígenas, el reconocimiento de su autonomía cultural, se sintetiza en un proyecto distintivo de ciudadanía. El paso de lo social a lo político surge por la experiencia de la lucha, a través de un procesos difícil, pero llega siempre a ese fin. Como dice Bartra, la conclusión lógica de los campesinos es: si no es posible que el gobierno cambie sus políticas ¡hay que cambiar al gobierno!

La apuesta de la ciudadanía como sujeto social también puede apoyarse en la perspectiva de los movimientos latinoamericanos, de acuerdo al análisis de James Petras (1999). Con una misma línea de argumentación, Petras asume que en los tiempos de la globalización, se ha generado una pérdida de fuerza social de los sindicatos, en la misma forma en que los movimientos sociales han llenado el espacio político abandonado, además del reforzamiento de la asimilación de partidos de izquierda al sistema electoral liberal. Así, lo destacable del texto de Petras para nuestro objetivo es el concepto del bloque histórico que retoma de Gramsci. Ninguna clase o sector de clase puede conseguir la hegemonía política en países con desarrollos tan desiguales y diversos. La formación de las clases no son procesos mecánicos, sino producto también de relaciones culturales, de las formas específicas en que viven, trabajan y confrontan los distintos sectores sociales. Para Petras, en América Latina se han constituido bloques nacionales antihegemónicos, multiclasistas, bajo la centralidad del movimiento campesino; pero no obstante la decidida inclinación al ámbito rural del análisis de Petras, este muestra la vinculación de los campesinos con movimientos obreros y urbanos. Reconoce la emergencia de nuevos actores y la participación de las ONG. Identifica las distintas corrientes de la izquierda y su impacto en la organización del campo latinoamericano. Vincula en Brasil al Movimiento de los Sin Tierra, con la propuesta de realizar proyectos de urbanización, y su consecuente cercanía a las ciudades. Como en el caso de Bolivia, los productores de coca se fueron articulando con los mineros desocupados, cuya experiencia de lucha favoreció la formación de sindicatos cocaleros. En otros lugares, la importancia de los movimientos urbanos en Argentina, así como en Colombia con respecto a las municipalidades. Una interesante experiencia es el caso del movimiento cocalero de 1996 en la zona del Putumayo y la baja Bota Caucana, que se movilizó a las ciudades y exigió reconocimiento y ciudadanía (Ramírez [2002] 2004).

En México se han dado esfuerzos de articulación indistintamente entre movimientos sindicales, campesinos, indígenas y urbanos. En el caso de Bolivia, es muy sintomática la experiencia de los grandes movimientos que reunieron a sectores indígenas, sindicatos y asociaciones urbanas. Más de diez años de movilizaciones que combinaron la lucha contra la privatización del agua, las protestas en 2003 contra la exportación del gas natural a Chile, después de que la policía ultimara a 59 manifestantes en la cuidad de El Alto y que poco después el entonces presidente Sánchez de Lozada abandonara el país. Lo mismo pasó cuando Carlos Mesa por las presiones de resistencia popular en 2005, al aprobarse la ley de hidrocarburos, se vio obligado a renunciar, y en

diciembre de ese año el Movimiento al socialismo (MAS) liderado por Evo Morales se convirtió en el primer partido en obtener mayoría absoluta. Aunque apresuradamente descrito, esto muestra con mucha claridad el paso de lo social a lo político por amplios sectores populares bolivianos, y la construcción de redes y movimientos sociales que van cimentando un proyecto integral de ciudadanía desde una visión de clase, pensada desde abajo, desde los pobres y los asalariados.<sup>5</sup>

La formación del sujeto social, sin embargo, es un proceso que no está exento de contradicciones. Se inserta, como afirma Guillermo Almeyra (2003), en las modificaciones introducidas desigualmente por la mundialización. Las grandes y nuevas migraciones interregionales e internacionales, así como las transformaciones demográficas globalizadas y su impacto en los Estados, han transformado la composición de las clases sociales, por su alto grado de diferenciación y por el desempleo estructural masivo en todo el mundo. Hay, como dice Almeyra, un acelerado proceso de deconstrucción y reconstitución de las clases, tanto como de las propias naciones, y de sus impactos diferenciados sobre el territorio. Lo anterior lleva implícito el hecho que una parte de la sociedad tiene aún desdibujado su proyecto político, se encuentra aún amorfa, fragmentaria y débil, ciudadanos individuales y pobres cuya única opción es la de votar en elecciones sobre las cuales no tienen control, quienes se encuentran desempleados, enfrentados a procesos productivos azarosos, sin espacios de defensa y resistencia colectiva, metidos en la vorágine de la consigna neoliberal de "empléate a ti mismo", rompiendo así las imaginarias articulaciones del llamado capital social.

Es igualmente cierto que las grandes migraciones desde los países dependientes hacia los centrales y las transferencias de población, dentro de cada país, desde zonas deprimidas hacia otras de mayor concentración de capital hayan roto la unidad étnica, cultural, nacional de grandes sectores de las clases obreras y de muchas zonas urbanas, reduciendo la capacidad de resistencia (y de integración) de los propios inmigrantes, y en

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Las experiencias relatadas por Petras y Bartra, así como las reflexiones de las bases sociales de las "revoluciones orilleras" que hace Coll, explican de alguna manera cómo desde la teoría crítica de la ciudadanía pueden existir vínculos políticos y sociales entre el campo y la ciudad. Esta correspondencia, social y política en esencia, tienen por supuesto implicaciones territoriales y en la concepción e impulso de proyectos de ciudad, como lo evidencian sobre todo las experiencias brasileña y boliviana. Se convierte ésta en una interesante línea de investigación que asocie las relaciones rural-urbanas con el impacto de la ciudadanía en el territorio. Agradezco a Blanca Ramírez su clara intervención para subrayar esta vinculación rural-urbana en el proceso de construcción de ciudadanía, aclaración hecha en el Seminario-taller internacional sobre "Teoría sobre la Ciudad contemporánea", realizado del 17 al 20 de octubre de 2011, en la UAM unidad Xochimilco, ciudad de México.

forma paralela se haya culturalmente desarrollado un nacionalismo reaccionario, cargado de racismo y localismo, componentes históricos muy fuertes de la identidad de muchos grupos de obreros y campesinos, y en general de importantes segmentos de trabajadores. Frente a un capital transnacional que tiene a todo el planeta como su campo de acción, las modificaciones sociales introducidas por la mundialización han reforzado la fragmentación sobre bases nacionales o locales. El avance de los trabajadores para romper la cultura conservadora se hace aún muy lentamente y en sectores reducidos. Estoy de acuerdo con Almeyra en el sentido de que los órganos de Estado (aparato estatal, Iglesia, sistema de partidos y sindicatos burocratizados integrados en el Estado) están en crisis en todo el mundo, pero eso hace paradójicamente que el capital refuerce su hegemonía cultural, sobre todo en América Latina (aunque también en Europa y África), mediante el monopolio de los medios masivos de comunicación que expanden y afianzan los valores culturales de la globalización y el individualismo.

Por ello, a la relativa descomposición del movimiento obrero, le ha seguido una gran diversificación y atomización de la participación, a través de identidades generacionales, de género y étnicas. Las redes de participación se hacen menos densas y menos ligadas a la familia y a la comunidad, como lo vimos con Barbero. En ese sentido, las alianzas de clase se vuelven más complejas y a veces más ambiguas, aunque no desaparecen. Los atributos sociales, civiles y políticos de la ciudadanía se convierten así en las cuestiones más relevantes, aunque parecen estar desconectadas entre sí. Con todo y este panorama incierto, se han generado, así me parece, las bases para un efectivo ejercicio de la ciudadanía, aunque no se haya producido todavía un cambio sustantivo en la cultura de la resistencia de los dominados, pues el periodo sigue estando definido por la resistencia al desmantelamiento de la ciudadanía social y no a la expansión de derechos que reduzcan los niveles de desigualdad y amplíe las libertades políticas.

La resistencia existe en todos los espacios sociales que se ven explícitamente afectados por las contradicciones del desarrollo y sus efectos más perniciosos. Se conforman movimientos que no desdeñan la legalidad ni las instituciones, aunque algunos no se subordinen a ellas. Su problema en la perspectiva de Almeyra (2003) es

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Un ejemplo que ilustra Almeyra sobre esta paradoja son los países europeos como Francia, con un electorado obrero que apoya decididamente a la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen, así como el refuerzo electoral que los fascistas de Acción Nacional recibieron de los ciudadanos italianos (*cf.* Almeyra, 2003).

precisamente su fragmentación y la dificultad para ir planteando un proyecto de nación y de ciudadanía alternativo. Las luchas de estos movimientos no se socializan del todo, o no lo hacen adecuadamente. A partir de esas movilizaciones, las organizaciones y movimientos pueden trascender y salir de posturas localistas, construyendo al mismo tiempo, un proyecto que dispute a la nación. Ese proyecto es la base de una construcción de ciudadanía sustantiva que promueva una relación respetuosa y democrática entre Estado y sociedad, en un espacio de expansión y equilibrio de los derechos ciudadanos para la mayoría de la población, y que se permita una participación democrática desde abajo.

El proceso, como puede apreciarse no es lineal ni homogéneo, depende del tipo de correlación de fuerzas de los actores en pugna. En México, como en otros países de América Latina, los sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos han resistido el proyecto neoliberal. La consumación de una primera etapa de esta confrontación fueron las elecciones de 1988, con un movimiento masivo que sin embargo no evitó la victoria de la fracción neoliberal. Pero se produjo después lo que he llamado el modelo neoliberal sui-generis, pues la implantación de la política del libre mercado no fue tan tersa como los neo-liberales hubiesen querido (Tamayo, 1999).

En síntesis, como puede desprenderse de esta reflexión, entiendo por sujeto social a una entidad colectiva que se construye en un tiempo y espacio específicos, y que por lo tanto es histórica, que activa sus facultades de reflexividad, reinterpretación cultural de códigos dominantes, y tiene capacidad de decidir y tomar acciones relevantes, constituyéndose así en un movimiento, formado por agentes o actores colectivos. Este movimiento se realiza en una secuencia y multiplicidad de acciones colectivas expresadas

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Este aspecto me parece crucial, para entender la pluralidad de los movimientos anticapitalistas a los que puede aspirar la ciudadanía. Una explicación justa de estos componentes políticos lo señala Almeyra cuando dice: "Los sectores (sociales) que toman parcialmente el relevo (del movimiento obrero) (como los ecologistas, desocupados, luchadores por la liberación sexual, feministas e indígenas o campesinos) lo hacen fuertemente influenciados por los métodos de lucha y las experiencias políticas del proletariado organizado. Los mismos desempleados han aprendido en la escuela del proletariado del cual forman un sector. Además, si bien estos movimientos sociales tienen gran peso político, el peso específico del movimiento obrero organizado, derivado de su papel en la producción, es muy superior a su peso numérico relativo, como lo muestran las movilizaciones obreras (como las italianas) que sacuden al gobierno. Por último, aunque las reivindicaciones de todos los movimientos sociales son reformistas, teóricamente podrían ser compatibles con el sistema, éste no las puede soportar ni satisfacer pues la desigualdad, el desempleo estructural, la restricción de la democracia, la discriminación sexual forman parte esencial de su política. Por consiguiente, esas reformas por las cuales se lucha con métodos proletarios en los hechos resultan anticapitalistas, son intolerables para el capital y se convierten, por lo tanto, en "reformas revolucionarias" (Almeyra, 2003: 5).

en un campo, o varios ámbitos, de conflicto tendiente a controlarlo o transformarlo (*Cf.* Touraine, 1994, 1995, 2005). Por consiguiente, cuando me refiero al ciudadano como sujeto, lo entiendo precisamente como esa construcción histórica, colectiva y como movimiento social. Distinta definición al ciudadano liberal, como individuo racional.

En consecuencia, la manera en que el ciudadano abre la opción de convertirse en sujeto colectivo de cambio político, tiene una razón estructural y una subjetiva. Las formas desiguales pero combinadas en que la mundialización impacta los procesos de desarrollo en las ciudades, regiones y países, son diversas. Así también de diversas son las formas de resistencia y los existentes espacios de conflicto en que se acuerpan. En todos los casos, los movimientos se enfrentan y combaten la fragmentación, y la necesidad de pasar de visiones localistas a visiones políticas y amplias de construcción de ciudadanías. La ciudadanía entonces puede permitir esta aglutinación y ese impulso hacia utopías abarcadoras, que vinculen lo particular y lo universal. Es entonces cuando los proyectos de ciudadanía, en tanto fuentes de construcción de utopías, aquellos que se van desprendiendo de las luchas de resistencia, deben mostrar un carácter cultural e ideológico, que se arraigan a tendencias nacionalistas, de clase o de otro tipo. Así es como se van perfilando dichos proyectos, que muestran tanto los éxitos como fracasos de intercalar los distintos discursos de resistencia de los grupos de ciudadanos más desprotegidos social, cultural y políticamente, para constituir bloques históricos fuertes y antihegemónicos.

## 3. Sociedad civil y proyectos de ciudadanía

Ciudadanía, en este marco amplio de interpretación, construye identidades colectivas, porque genera un sentido de pertenencia, una constelación de significados y aspiraciones colectivas, prácticas conflictivas y hasta antagonistas entre sí; que se muestran discursivamente en proyectos y utopías. Los movimientos sociales necesitan desarrollar y consolidar prácticas y concepciones en al menos tres dimensiones políticas fundamentales: la relación entre Estado y sociedad civil, los derechos ciudadanos y la participación política (Tamayo, 2010). Estas tres dimensiones se entrelazan, se explican y se mueven a consecuencia del efecto y agitación entre sí. La relación entre Estado y sociedad civil es, en términos de la definición de un proyecto de ciudadanía, las formas simbólicas que los grupos, actores y movimientos le asignan a la estructura teórica del Estado y al papel de la sociedad y de los grupos que la conforman. Esta relación está

determinada por la concepción del predominio de ciertas valoraciones de unos grupos o clases sobre otros, como adversarios o aliados, así como del sentido que los propios actores le asignan a las formas institucionales y no-institucionales de participar y de cómo participar. Si los cambios en la estructura del papel del Estado en la economía y la política traen aparejados cambios en las características de las prácticas y configuraciones de la sociedad civil, esto no se entendería si se concibe a la sociedad civil como un estadio separado, divorciado del Estado, sino más bien como un vínculo de poder, que impacta uno a la otra y viceversa, aunque nunca de manera recíproca. Así, un Estado populista tendrá una sociedad civil rígida y corporativizada. Un Estado predominantemente neoliberal, se entenderá con una sociedad civil sustitutiva de las funciones sociales del Estado. Un Estado social y humanista se entenderá con una sociedad civil culturalmente socialista y humanista.

La sociedad civil no es homogénea ni neutra políticamente. Se expresa como una densa red de movimientos sociales y asociaciones diversas. Para ser claro, retomo la definición de Dagnino, Olvera y Panfichi (2010: 26): "... (La sociedad civil está) formada por una gran heterogeneidad de actores civiles (incluyendo agentes conservadores), con formatos institucionales diversos (sindicatos, asociaciones, redes, coaliciones, mesas, foros), y una gran pluralidad de prácticas y proyectos políticos, algunos de los cuales pueden ser incluso no-civiles o poco democratizantes". Debemos decir además que la política neoliberal ha hegemonizado otra concepción de sociedad civil que la limita a ser un "tercer sector", ambiguo y amplio, donde cabrían múltiples tipos de asociaciones civiles, entidades privadas para la acción pública definida como la participación social en la función pública (Natal, 2007) y acotada como actividades de "servicios a terceros". Para Dagnino, Olvera y Panfichi ([2006] 2010: 24) esta concepción relega "el perfil crítico que la idea de sociedad civil contenía a mediados de los noventa". Las organizaciones de la sociedad civil se debaten pues entre resistencia y reforma (Reygadas, 2007), entre autonomía y clientelismo.

Existen distintos tipos de sociedad civil. Según Nogueira (2004: 248-249) se puede hablar de una sociedad civil liberal, en la cual el mercado comanda, la lucha es competencia en el mercado y radicalmente de tipo privado, sin interferencias públicas o estatales. Se articula a la sociedad civil con el mercado y se diferencia a sí misma del Estado. El Estado, por su parte, se muestra como el otro lado de la moneda, tanto con respecto al mercado como a la sociedad civil. El Estado mínimo, justamente, sería la concepción que corresponde a este tipo de sociedad civil en el periodo de la globalización

(Grasa, 2007), con funciones reducidas a ser el guardián de la ley y de la seguridad, más de tipo liberal y representativo, que democrático y participativo. Para Nogueira en este tipo de sociedad civil no habría acciones que pretendan la conquista del Estado, porque de alguna manera aquellas se han ido corporativizando (o institucionalizando). En este espacio de la sociedad civil puede existir oposición, dice, más no contestación.

No obstante, con una diferencia de enfoque, la perspectiva de Dagnino, Olvera y Panfichi ([2006] 2010) parte de una articulación entre Estado neoliberal-sociedad civil; la hegemonía del Estado se expresa a través de un espectro diverso de personajes y actores colectivos que se organizan, algunos, si se quiere, de modo restringido, egoísta, e institucionalizado. Pero el hecho que la relación hegemónica del Estado neoliberal exponga a una sociedad civil neoliberal, no significa que no puedan existir otras agrupaciones que luchen precisamente con estrategias contra-hegemónicas y proyectos alternativos. Así, la vinculación Estado-sociedad civil es una primera dimensión analítica que aclara las formas de construcción de ciudadanía.<sup>8</sup> En esta primera dimensión el papel de dicha sociedad civil en la configuración de proyectos hegemónicos y contra-hegemónicos es fundamental para comprender la construcción social del sujeto, a partir de distintos sectores y movimientos sociales, aspecto éste que analizamos en el primer apartado.

Como derivación de lo anterior, Dagnino, Olvera y Panfichi (2010:25) refieren la importancia de los proyectos políticos, pues "el debate sobre el papel de la sociedad civil en la construcción de la democracia debe verse como una lucha simbólica sobre el lugar, los actores y la agenda de la disputa entre proyectos políticos distintos". Es precisamente este proyecto político distintivo, en disputa, el que da significación a un determinado tipo de proyecto de ciudadanía, determinado tipo de concepción del papel del Estado en la sociedad, de la organización autónoma e independiente de asociaciones y grupos de distintos tipos de sociedad civil y proyectos culturales hegemónicos, determinado tipo de equilibrio de derechos (civiles e individuales, sociales y colectivos, y políticos) para una sociedad igualitaria, y determinado tipo de formas particulares de participación ciudadana; es un proyecto además que abre la posibilidad de transitar de lo social a lo político.

Estos autores han articulado tres aspectos relevantes para comprender la disputa por la construcción democrática en América Latina, lo que para otros autores es la disputa

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Además de esta primera dimensión, la ciudadanía se constituye al menos por dos dimensiones fundamentales, lo derechos ciudadanos y la participación ciudadana. Para profundizar en la teorización y crítica de la ciudadanía véase Tamayo (2010).

por la nación, y lo que para mí se ubica más ampliamente, que la propia democracia, en el sentido de una disputa por la ciudadanía. De cualquier modo, la disputa se da a través de la relación con el Estado, la sociedad civil y la construcción de proyectos políticos. Coincide y refuerza la perspectiva de la construcción de proyectos de ciudadanía, a partir precisamente de distintas concepciones del Estado, de la sociedad civil, de los derechos y la participación. Asumo así la noción de proyecto ciudadano como ese "conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orienta la acción política de los diferentes sujetos" (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2010: 43).

Así, un sujeto, para serlo, debe tener un proyecto definido, que se enfrenta a otros para alcanzar la hegemonía. El proyecto refleja y es resultado del nacimiento y consolidación del sujeto social, debido a que enfatiza la intencionalidad política, autoafirmación del sujeto que los propone, establece relaciones conflictivas y disputa por la ciudadanía. El proyecto de ciudadanía genera un vínculo entre cultura y política, vehicula prácticas y significados sobre la sociedad y sobre las estrategias a seguir para alcanzar la utopía, el progreso o la transformación. El proyecto se convierte en una concepción de ciudadanía que se construye colectivamente, con referencia a la experiencia histórica y a la situación o drama social del presente, para proyectar un futuro promisorio, una utopía (Tamayo, 2010). En síntesis la definición de los proyectos societarios o de ciudadanía, (*Cf.* Paulo Netto en Dagnino, Olvera y Panfichi ([2006] 2010: 45) son aquellos que presentan una imagen y un imaginario de la ciudadanía que se piensa y quiere construir, que reclaman determinados valores y facultades para justificarla y que privilegian ciertos medios y recursos para concretizarla.

Los proyectos, que Dagnino, Olvera y Panfichi (2010) exponen para América Latina son básicamente tres: el autoritario (conocido en general como populismo), el neoliberal, y el democrático-participativo. Se asocia bien a la tipología que Nogueira (2004) hace con respecto a las formas de sociedad civil prevalecientes. En mi caso, considero que estos proyectos coexisten en un espacio de conflicto, donde se alcanza por uno de ellos la hegemonía política e ideológica. Están definidos por actores, clases y sectores de clase que conforman bloques hegemónicos o subalternos.

Un ejemplo que ilustra bien este argumento es la producción de proyectos distintivos de ciudadanía en el caso mexicano. Las evidencias en este país de los cambios ocurridos en la cultura ciudadana parten del análisis de las transformaciones de tres actores sociales relevantes: la élite política, los empresarios y el movimiento popular

(Cf. Tamayo, 2010, 1999). Confrontando sus exigencias e intereses, estos actores fueron delineando -unos desde abajo, desde la perspectiva del movimiento social, y otros desde arriba, desde las visiones de la élite gobernante y de la lucha interna entre ésta y la clase empresarial- sus proyectos particulares de ciudadanía. La perspectiva desde abajo fue la de una ciudadanía colectiva y nacionalista que exigió la expansión de derechos sociales, al mismo tiempo que una amplia participación política. Mientras tanto, desde arriba, la concepción tradicional liberal buscó su justificación en una ciudadanía individualista. Lo que la evidencia disponible demuestra es que la ciudadanía ha venido significando diferentes cosas para diferentes actores sociales, y eso los ha colocado en la disputa por la nación.

De 1970 a 1982 el Estado mexicano subrayó y expandió aunque con ciertos límites los derechos sociales de la población, pero los privilegió por encima de los derechos políticos y civiles. En realidad, los derechos civiles a sabiendas, fueron minimizados y abandonados tanto en el discurso presidencialista como en la práctica cotidiana. Y los derechos políticos se limitaron hasta más no poder con el control corporativo y la ausencia de democracia en los procesos electorales. Pero, de 1982 a 1994, el énfasis se dio en los derechos civiles, principalmente aquellos ligados a la propiedad privada, a las libertades de expresión y de creencia, y a una cultura del individualismo a ultranza. Esta práctica ha prevalecido hasta los albores del siglo XXI. El Estado sigue participando menos directamente en la economía, niega la política social de sus antecesores populistas y apoya las demandas de regeneración y propiedad individual. En general, ha venido acotando al límite los programas de bienestar social.

Por su parte, los empresarios reaccionaron de inmediato a los cambios promovidos por el Estado, un poco obligados por la alteración estructural del modelo de desarrollo. Desde la década de los setenta del siglo XX, empezaron a reconocerse como clase y actuar más políticamente, y sucedió lo que podemos considerar la gestación de un movimiento social de los empresarios. No debe sorprender entonces que la política social fuese la última que la burguesía nacional quisiera apoyar, incluso así lo manifestó desde 1982 y hasta hoy al mantener la misma estrategia con las mismas argumentaciones. Para decirlo de otra manera, si alguien en todo este periodo ha sido congruente en sus principios, ese fue la burguesía mexicana, la que al final vería con gusto la cercanía ideológica con la que los gobiernos neoliberales defenderían las garantías individuales, principalmente el derecho inviolable a la propiedad privada (cf. Roberts, 1995; Tamayo, 1999, 2010).

Finalmente, la clase trabajadora y el movimiento popular, por el contrario, han tenido que defender los derechos ya ganados desde décadas atrás. Por ello en los años setenta del siglo pasado, las principales demandas se centraron en mantener vigentes los derechos sociales y laborales. Con la entrada de la crisis su exigencia se desdobló, por las obvias y más apremiantes necesidades de tierra, créditos, educación, seguridad social y mejores salarios, todas ellas profundizadas durante los ochenta. De tal forma que al agudizarse éstas, otras reivindicaciones se elevaron para ocupar el mismo nivel de importancia, yuxtaponiéndose unas a otras. Así fue con la ciudadanía civil, sobre todo por los derechos humanos y de las mujeres (Tamayo, 2000), y con la ciudadanía política, alrededor de la participación electoral (López Monjardín, 1989, 1986). En realidad fue una disputa abierta en la que los agravios a la población se combinaban con lo social, lo civil, y lo político y se colocaron en el mismo nivel de importancia. Los distintos sectores sociales conformaron un amplio movimiento social, democrático y nacionalista. Su lucha ha querido combinar y proyectar las exigencias de distintos sectores, campesinos, trabajadores, residentes, mujeres, jóvenes y estudiantes, de la ciudad y el campo. Con ellos el movimiento elaboró un programa amplio y nacional que le dio, en primera instancia, una considerable capacidad de acción. Se constituyó eso que llamo un espacio de ciudadanía, que poco después se mostraría nuevamente una y otra vez, aunque bajo otras condicionantes, durante toda la década de los noventa y la primera del siglo XXI. El impacto del neoliberalismo ha fragmentado nuevamente el proyecto contra-hegemónico de los pobres y los trabajadores, ciudadanos restringidos de la nación y las ciudades, y ese es el reto que enfrentan en la actualidad.

Cabe aclarar que los actores estratégicos aquí esbozados no presentaron nunca un carácter homogéneo. Al interior hubo fricciones, tensiones y visiones encontradas. El mejor ejemplo de ello son los cambios en la correlación de fuerzas al interior del Estado entre las corrientes nacionalistas-revolucionarias, populistas y neoliberales. Así sucedió con la formación de la Corriente democrática, su renuncia al PRI y la posterior formación del PRD. La burguesía mexicana tampoco se ha mostrado homogénea ni en sus características organizativas, ni en su ideología, ni en su influencia política. La topografía económica que organizaba por un lado a los grandes empresarios y en otro a los pequeños y medianos trazaría los conflictos y las múltiples alianzas de los propietarios entre sí y con la clase política. Finalmente, el movimiento popular ha mostrado una gran heterogeneidad. Han venido participando en él diversos sectores de cristianos comprometidos, ecuménicos, mujeres (tanto feministas como de clase media y otros

sectores populares), residentes, trabajadores de sindicatos oficiales, trabajadores de sindicatos independientes, estudiantes y grupos de izquierda.<sup>9</sup>

La heterogeneidad de los actores políticos y sociales, expresa la heterogeneidad y los distintos grados de maduración de los proyectos de ciudadanía.

# 4. Ciudadanía y movimientos sociales urbanos

En este apartado muestro los cambios en la naturaleza del movimiento social urbano, de lo pensado y percibido por este sujeto durante un periodo que inició en 1968 concluyendo en una nueva época, a partir de 1988, y que recorrió una sinuosa trayectoria durante la última década del siglo pasado y la primera del siglo presente. Este movimiento pasó de identificarse con una clase, la del proletariado, y ha llegado a reconocerse con otro sujeto, el ciudadano, cuya expresión colectiva concreta fue fijándose en el periodo de la globalización.

Una de estas diferencias se evidencia en la forma cómo los movimientos sociales han venido modificando las interpretaciones de sí mismos, lo que refleja claramente las determinaciones est ructurales y las condiciones históricas de esta transformación. El movimiento urbano ha experimentado profundos cambios políticos y sociales, hasta convertirse en una parte constitutiva de un gran movimiento ciudadano que sigue participando socialmente y exige la ampliación de derechos sociales, políticos y civiles para los habitantes pobres de las ciudades. La hipótesis de la cual parto para pensar las condiciones de esta dinámica es que el movimiento urbano popular fue la expresión del tránsito hacia la globalización; el movimiento ciudadano, resultado de aquél, se erige en la plena presencia de la globalización.

Un aspecto relevante aquí es explicar la situación actual que se ha venido generado a partir del período anterior, porque la forma en que se han reacomodado los actores sociales, el Estado, los movimientos sociales, los grupos empresariales, los trabajadores, además del curso político y económico, contrasta y depende de las condiciones en que se expresaron y enfrentaron los conflictos sociales en los últimos 30 años. Hoy, la participación de la sociedad civil se incrementa sistemáticamente y ha cambiado cuantitativa y cualitativamente. Sólo en la ciudad de México, durante 1997,

21

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> El relato histórico de los cambios en las prácticas y proyectos de ciudadanía, desde la perspectiva de estos actores sociales y políticos, así como la heterogeneidad y complejidad del proceso que inicia desde 1968 puede verificarse en mis libros "Los veinte octubres mexicanos" (1999); "Espacios Ciudadanos" (2001) y "Crítica de la ciudadanía" (2010).

ocurrieron más de 3 mil manifestaciones públicas al año, de las cuales aproximadamente el 30 por ciento se dirigió al gobierno capitalino. Las restantes de carácter federal fueron, por orden de importancia, conflictos laborales, manifestaciones políticas, movilizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales y religiosas, además de decenas de bloqueos de calles y avenidas, así como tomas de edificios públicos. Diez años después, entre 2007 y 2008 el número de marchas llegó a 16 mil, más de 42 por ciento dirigidas al gobierno del DF. En febrero, abril y junio se registraron el mayor número de participantes con 700 mil, 2 millones y 200 mil, respectivamente. Las manifestaciones públicas muestran grados de efervescencia de sectores sociales, los conflictos enraizados en determinadas épocas, y formas simbólicas de radicalización de los movimientos.

Otro aspecto notable del cambio social es la situación de la política institucional ante la diversidad de las poblaciones en constante urbanización. Los principales partidos políticos del país, tanto como autoridades de gobierno, han coincidido en señalar que el México urbano es más disímil, plural, con un número mayor de fuerzas sociales que participan y ejercen sus derechos, lo que les ha obligado a conciliar sus plataformas políticas con la heterogeneidad de la población para que correspondan a las nuevas aspiraciones de los individuos, desde su experiencia cotidiana. No obstante, para aquellos partidos clasistas, la participación electoral ha hecho disociar el nexo natural entre clase y partido, tal como le sucedió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando dijo ser el heredero del gobierno posrevolucionario asumiéndose como representante de una sociedad moderna compuesta principalmente por dos clases protagonistas: el proletariado y la burguesía nacionalista; y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se fue separando cada vez más de las necesidades sociales de los movimientos. Lo cierto es que la participación electoral atrae a otros sectores organizados por fuera de las clases y se tiende a reforzar la imagen de una sociedad que no tiene clases homogéneas ni hegemónicas, sino que es heterogénea y contiene diversas bases de identidad colectiva (Przeworski, 1985). No obstante, a pesar de esta imagen diluida de la lucha de clases, las elecciones expresan de manera contradictoria una forma particular y concreta de esta disputa, porque la población toma posiciones políticas al reconocerse en el partido de su

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Para un análisis de la década de los noventa del siglo pasado, véase a Combes (2000 y 2004), además Tamayo (2002). Los datos recientes han sido retomados de los registros realizados en la investigación Proyecto "Procesos y Actores de la Participación Política en América Latina" (PALAPA), proyecto de la Agencia Nacional de Investigación (ANR- France)/ Palapa, Coordinación general: Camille Goirand (Universidad de Lille II, Francia)/ Palapa/México/UAM, proyecto "Marchas", coordinación Hélène Combes (CNRS, CRPS Universidad París 1 Panthéon Sorbonne) y Sergio Tamayo (UAM-A).

elección, el que a su vez representa una determinada posición de clase por medio de los principios que enarbola, como ha pasado en Ecuador, Bolivia y Venezuela, por citar algunos casos, y en México con el movimiento contra el fraude electoral de 2006.

Para explicar las características particulares de los movimientos sociales urbanos, abordo dos ejes analíticos que se entrecruzan entre sí: *a*) comparo la situación actual del movimiento con su evolución en los últimos veinticinco años, de una manera que permita detectar los cambios sustanciales en su naturaleza; y *b*) relaciono sucesos representados por el movimiento con reflexiones teóricas acerca de la acción colectiva.

Ahora bien, si de entender la transformación en la naturaleza del movimiento social se trata, me interesa la referencia a cuatro principales cambios evidentes en esta transición: la autodefinición del movimiento como ciudadano y el relativo equilibrio en el ejercicio de los derechos; la dinámica del movimiento que muestra etapas diferenciadas por tipos de liderazgos e ideologías en su ciclo de desarrollo; las alianzas sociales y políticas; y, la relación con el Estado; estos cuatro aspectos son los que se destacan a continuación.

Un primer cambio tiene que ver no sólo en cómo algunos estudiosos del tema interpretamos los movimientos, sino de qué manera éstos se van pensando, percibiendo y redefiniendo a sí mismos. Durante la década de los setenta y el primer lustro de los ochenta, los analistas se interesaron en justificar, por cualquier medio, la importancia social y política del Movimiento Urbano Popular. Había que explicar el origen de las revueltas, por qué surgían, de dónde provenía su base social, el carácter revolucionario de su lucha y sus perspectivas políticas, y en consecuencia, su forzada relación con el movimiento obrero y la lucha de clases. Prevalecieron los análisis de un marxismo ortodoxo, dogmático, muchos de ellos de tipo economicista que analizaron la ciudad para explicar las acciones colectivas derivadas de ella, o al contrario, pretendían explicar el movimiento social para describir la estructura urbana. La ciudad era consecuencia de las relaciones sociales de producción capitalista (Castells, 1978; Lojkine, 1977 y 1979; Topalov, 1979; Pradilla, 1984) y la población urbana que se sumaba al movimiento era considerada parte del ejército industrial de reserva, obreros desempleados temporalmente, subempleados que, aunque indirectamente, se relacionaban con los obreros en activo y constituían un conjunto integrado del movimiento obrero (Alonso, 1980, 1988; Moctezuma, 1983; Moctezuma y Navarro, 1980; Tamayo, 1989). El MUP era considerado, por su situación objetiva, parte esencial de la lucha de clases.

Los estudios sobre el MUP relacionaban casi siempre tres aspectos metodológicos: las causas objetivas de su surgimiento, sus formas de organización y la confrontación con un Estado que se definía clasista y represor. Estos elementos de análisis coincidieron con las temáticas que las organizaciones sociales debatían en los encuentros de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup, 1983a, 1983b, 1983c, 1983d y s. f.), cuyas discusiones se daban, en términos generales, sobre lo siguiente: análisis de la situación actual (situación objetiva, problemas de vivienda, carencias estructurales en el capitalismo, etcétera); intercambio de experiencias organizativas que las asociaciones venían adoptando (estructura interna, democracia directa, organigramas, constitución de asociaciones de carácter legal, etc.); y caracterización del Estado (definido como burgués, que delineaba así las políticas estatales de vivienda, servicios y equipamiento urbano, además del control social derivado de la represión).

Fue una manera de reflexionar sobre la dinámica interna del movimiento, que iba correspondiendo con los principales postulados de la teoría de la movilización de recursos, pero que los estudiosos nunca rescataron en su análisis, tal vez por su desconocimiento o por considerarla una reducción estructural-funcionalista, contrapuesta al enfoque marxista prevaleciente en ese entonces. La perspectiva de la movilización de recursos estudia la estructura de las organizaciones como expresión concreta de los movimientos y le preocupa, sobre todo, las causas objetivas de su surgimiento y declinación, a partir de las cuales se elabora una tipología de la acción. La movilización de recursos en sus elaboraciones recientes ha hecho hincapié en los aspectos de tipo simbólico, cultural, legal e ideológico, incluso emocional, con los cuales se analiza a los participantes, no únicamente como individuos que reaccionan a una causa objetiva, sino que se identifican con los contenidos de los discursos y plataformas políticas e ideológicas de las organizaciones del movimiento social. Este enfoque permite tanto observar las causas de la participación, como diferenciar los niveles de compromiso de unos y otros, así como de responder a la pregunta de por qué unos participan en un tipo de organización y otros lo hacen en asociaciones distintas (Cf. Cisneros, 2001).

Los estudios realizados en América Latina durante este periodo se acercaron mucho a la teoría de la movilización de recursos por su objeto de estudio, aunque no profundizaron teóricamente en todos los aspectos que aquella sí prevé. El interés se orientó más bien hacia el aspecto organizativo y operativo, de tipo del análisis leninista de la organización; lo originaban los intelectuales orgánicos que al mismo tiempo eran

académicos de las universidades, activistas y dirigentes de organizaciones sociales. Se tenía la necesidad de desarrollar una teoría cercana a la experiencia empírica.

Actualmente, el interés teórico ha cambiado. El movimiento social urbano ha venido expresándose y reconociéndose en y por la sociedad. Se hizo altamente heterogéneo, como la misma población urbana a la que trataba de influir. Se empezó a manifestar por medio de movimientos políticos, de participación electoral y de convenciones nacionales. Pero la diversidad tendió a la des-unificación. El movimiento obrero fue desplazado de la escena como sujeto fundamental porque el liberalismo no necesitaba de esos sectores sociales para apoyar sus políticas. Necesita en cambio de las empresas trasnacionales y del ciudadano como individuo, en su acepción más occidental que legitimara su representatividad. Ya no requiere convocar ni a la clase ni al pueblo como categoría nacional, con base en la estructura actual del mercado laboral. Éste muestra una fuerte declinación del empleo en actividades secundarias, aumento en las terciarias (de comercio y servicios) y un alto índice de desempleo; la población está constituida por una importante clase media que demanda derechos ciudadanos, no necesariamente vinculados a reivindicaciones laborales. Debido a estos cambios estructurales, el sujeto social empezó a transformarse, ahora es el ciudadano, y no el obrero; y uno de los mejores ejemplos de este cambio lo ha sido el movimiento urbano popular que fue modificando su percepción e interpretación de los factores de identidad de su base social, el lenguaje de su discurso y su caracterización del Estado. Hoy el movimiento urbano se autodefine como ciudadano, pero identificado con un componente profundamente popular, lo que cualifica su propia interpretación de ciudadanía (Smith y Durand, 1995). Lo que me importa resaltar es que este término era impensable en los años setenta, porque el movimiento entonces era revolucionario, expresarse como ciudadano significaba tanto como ser reaccionario y burgués.

El contexto y los significados cambian. En ese entonces ciudadanía era un concepto que se asociaba a la sociología clásica, vinculada a las ideologías dominantes de las sociedades occidentalizadas, con la cual se justificaba la armonía social, el progreso y la modernidad. Ciudadanía era una forma de homogeneizar la pluralidad, sin contradicciones, sin lucha de clases y sin intereses antagónicos; por lo tanto, en los países del tercer mundo, donde se planteaba la agenda de la revolución y de los movimientos de liberación nacional, definir a los movimientos como ciudadanos era tanto como ubicarse en el deseo reaccionario de la inclusión al capitalismo, cuando lo que se pretendía era el rompimiento y la crisis revolucionaria.

La identidad del ciudadano se ha venido orientando en un intento por romper el tradicional control del Estado sobre la sociedad civil. Por tal motivo, no debería extrañarnos que al cambiar algunas características de las relaciones societales, los actores sociales ya no se adecúen a la existencia de un estado benefactor, paternalista, sino a uno que sea instrumento directo de la ciudadanía. En un contexto así, se reacomodan políticamente los grupos sociales: las élites, los empresarios y los movimientos, identificando sus intereses de otra manera, redefiniendo sus derechos y oponiéndolos a otros, enfrentándose proyectos de nación o de ciudadanía, como vimos en el apartado anterior, que a veces sólo implícitamente se manifiestan como expresiones de la lucha de clases.

Una segunda característica de esta gran transformación es que el movimiento social ha sido un proceso dinámico y no un hecho aislado. Touraine (1988: 68, 1994, 2005) define al movimiento social como la acción colectiva orientada culturalmente y conflictiva socialmente, de una clase social definida por su posición de dominación o dependencia en el modelo de apropiación (es decir, posición política y social), que busca el control de la historicidad, es decir, del ámbito social y cultural donde se mueve y construye la experiencia vital. El movimiento no es pues un dato, sino un proceso continuo y discontinuo, histórico y transformable.

Los casos del movimiento urbano y del movimiento de mujeres muestran más nítidamente la validez de esta afirmación para el caso mexicano. Después del conflicto estudiantil de 1968 y hasta 1970, estas acciones se expresaron principalmente por las revueltas de estudiantes en ciudades del interior del país, surgieron pequeños grupos políticos de izquierda, las comunidades cristianas de base y los grupos de guerrilla urbana. Las mujeres empezaron a cuestionar su situación de género en la historia y en la sociedad, organizándose en reducidos grupos de clase media: periodistas, intelectuales, profesoras universitarias, estudiantes y activistas políticas. También se escenificaron invasiones a terrenos urbanos en las principales ciudades del país. A finales de los años setenta el número de organizaciones sociales había aumentado considerablemente. Entre 1977 y 1982 se formaron frentes nacionales con sectores sociales de trabajadores

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Algunas ciudades que se hicieron referentes de invasiones de tierra fueron Temixco1963, Chihuahua en 1968 y luego en Monterrey, Durango, Hermosillo, Tijuana, Zacatecas, Oaxaca y la ciudad de México.

universitarios, maestros, feministas, obreros, campesinos, pobladores, jóvenes y activistas contra la represión.<sup>12</sup>

Lo anterior muestra que un movimiento de carácter nacional se fue constituyendo por un número significativo de luchas locales y aparentemente aisladas entre sí. La influencia de este proceso fue sustancial en la vida política del país, ya que aunado al crecimiento de la actividad popular ocurrió también un proceso de reorganización de los empresarios, que comenzaron a externar sus inquietudes ante la situación de crisis económica y política de la época; al tiempo que el movimiento obrero oficial también se enfrentó a posiciones tanto de la izquierda como de los empresarios, presionando así al gobierno para ampliar los derechos sociales de los trabajadores y obtener las prebendas de la burocracia sindical. La evidencia disponible muestra que los movimientos sociales no se desarrollaron tan aisladamente como a veces se ha llegado a suponer, ni siquiera en una relación bipolar respecto al Estado, aunque fuera éste su principal interlocutor. Al contrario, las demandas como sector social tuvieron repercusiones sobre los derechos de otro u otros sectores, y fue así como se reflejó, en la confrontación entre grupos y el Estado, la naturaleza del conflicto de clase y el paso de las reivindicaciones sociales a la formación de proyectos de ciudadanía.

Después de los sismos de 1985 en México, el MUP cobró una importante fuerza social y política cuando pasó de reivindicar vivienda, arraigo y ciudad, a destacar la democratización de la vida urbana y nacional. Fue a partir de este hecho que conscientemente la sociedad se empezó asumir plural, y la demanda por democracia pudo unificarla. Hay que hacer notar que de una acción espontánea de rescate de víctimas y en solidaridad con los damnificados, además del concurso de las organizaciones barriales para reconstruir una especie de ciudad habitable dentro de la otra macrocefálica urbe, se derivó un movimiento ciudadano por la democracia en torno al cual se manifestaron importantes grupos de intelectuales, mujeres, estudiantes, sectores

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> En este período se formaron los siguientes sectores del movimiento social: Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU), Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Frente Nacional para la Liberación de la Mujer (Fnalidem), Coordinadora Sindical Nacional (Cosina), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), Frente Nacional contra la Represión (FNCR) y Consejo Popular Juvenil (CPJ), entre otros. Después se constituyeron el Frente Nacional por la Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la Carestía (FNDSCAC) y el Comité Nacional por la Defensa del Empleo (CNDEP), con la combinación de aquellos organismos.

sociales y partidos políticos.<sup>13</sup> En efecto, durante este periodo otros movimientos sociales fueron aclarando sus propuestas de nación, que en realidad eran proyectos de ciudadanía: de redefinición de la función del Estado sobre la rectoría económica del país y de derechos sociales, civiles y políticos. Las propuestas se fueron decantando según el interés de los sectores sociales, de ahí que la lucha por la ciudadanía haya sido una muestra concreta de la naturaleza del conflicto de clase en ese momento.<sup>14</sup>

En 1988, 1994, 2000 y 2006, estos proyectos se enfrentaron en las contiendas electorales. La apuesta nacionalista y popular perdió una y otra vez en las urnas, lo que acabó con las expectativas de mucha gente sobre la posibilidad de un cambio de régimen. Pero el efecto social y la cultura política de México habían echado raíces por primera vez en mucho tiempo. La población se había organizado en opciones reales de gobierno. El movimiento popular había pasado de defender primordialmente derechos sociales de la población a demandar el derecho de gobernar, lo que sugiere que habrían adoptado una perspectiva más política.

Es evidente que cuando el grupo neoliberal del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994) ganó la hegemonía en la década de los noventa, el movimiento social en su conjunto se desarticuló, pero no por ello desapareció. Los sindicatos fueron incapaces de constituir un frente sólido que encabezara otra opción al neoliberalismo creciente, como también lo fueron otros sectores (los cristianos, maestros, mujeres y colonos) que en su momento habían escenificado importantes acciones colectivas, aunque ahora muchos se ofrecían como movimientos atomizados y desarticulados. Las formas anteriores de organización dejaron de ser llamativas, como las ideas de comunidad, autogestión y las formas de estructurar jerárquicamente la organización interna. No obstante, la población estaba más interesada en la política, en la forma de gobernar y en la participación electoral. El movimiento social, por lo tanto, no decreció, simplemente se organizó de otra manera. Los ciudadanos intentaron ser menos pasivos, aunque esta menor pasividad no

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Incluso el Partido Acción Nacional (PAN), que para entonces mejoraba electoralmente en los estados del norte de la República, radicalizó su participación con los llamados a la resistencia civil (Tamayo, 1996).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Un ejemplo de ello fue el movimiento empresarial. La burguesía y las élites económicas tenían claro, como se explica con la formación de proyectos de ciudadanía en el apartado anterior, desde 1975, cuando se formó el Consejo Coordinador Empresarial, que el proyecto de nación pasaba por la privatización, lo que implicaba reforzar, desde su perspectiva, la dimensión privada de ciudadanía, alejándose cada vez más del proyecto que tenían los asalariados y los pobladores pobres de las ciudades.

se reflejó al principio en un desarrollo organizativo ni en una generación de vínculos entre los distintos sectores del movimiento.<sup>15</sup>

En 1994, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las elecciones presidenciales, los asesinatos y secuestros políticos, así como la crisis financiera fueron el contexto en el cual se expresaron una diversidad de organizaciones ciudadanas: grupos de asistencia social, comités de vigilancia electoral, caravanas de apoyo a campesinos e indígenas, organizaciones sociales reivindicativas, convenciones nacionales, etcétera. Si estudios como el de Sergio Zermeño (1996) muestran que la sociedad ha venido presentando fuertes síntomas de anomia, existen importantes salvedades, como las que he querido mostrar en este trabajo, por lo que el problema analítico se ubica no en la falta de participación, sino en la parcelación social sin lazos entre los fragmentos. El movimiento social se ha atomizado pero aún está presente, organizado en pequeños grupos como en los primeros años de la década de los setenta; la diferencia es que hoy son más activos y críticos, aunque carezcan de un proyecto hegemónico que los unifique. Con todo, una línea de izquierda, la socialdemocracia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganaría en la ciudad de México desde 1997, cosa impensable pocos años antes. Y la reacción de la derecha, con el Partido Acción Nacional (PAN) triunfaría en las elecciones presidenciales de 2000, derrotando la histórica herencia de la revolución mexicana. Así, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los últimos reductos del autoritarismo sucumbió finalmente, aunque lo hiciese once años después de la caída del Muro de Berlín, ante el dinamismo del "cambio y la alternancia democrática", pensada entonces, sobre todo ésta última, como símbolo del sueño americano. Fue la evidencia categórica de la entrada de México a la democracia.

Poco duró, sin embargo, el tiempo de la ingenua algarabía por haber llegado, según sus apologistas, a este tipo de democracia. La alternancia fue el fin que justificó todos los medios. Al ganar y desbancar al partido único en el gobierno, se disculpaba todo, incluso que una buena parte de la izquierda votara por la derecha, argumentando el "voto útil". La desgracia para el país se observó ante la ineficiencia de esa derecha alternativa en el poder, lo que armonizó con la insolvencia social de las políticas neoliberales. Poco después, ya no fue la ineficacia del PAN en el gobierno derechista lo que desatinaba, sino la política intolerante y privatizadora que se impuso. Y en 2006,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Parte de la explicación de esto obedece a la creación de un sistema de diferentes partidos políticos en el país, a partir de la reforma política de 1977 y a las alianzas generadas entre partidos y movimientos (Tamayo, 1999).

guiado por ese "gobierno democrático" se operó, según muchos observadores, otro gigantesco fraude electoral que polarizó aún más a la nación, entre izquierdas y derechas, entre ricos y pobres, y entre regiones, sumada a la galopante violencia desatada en todo el país por la militarización del combate a la delincuencia organizada, e impuesta por el bastante deslegitimado recién presidente Felipe Calderón. Ciertamente, a pesar de los subterfugios ideológicos, los ciudadanos ya no podían pensar que la derecha era tan democrática ni eficiente, por el simple hecho de ganar unas elecciones.

La tercera característica del cambio experimentado por el movimiento urbano popular ha sido la de generar redes y alianzas sociales y políticas. Entre otros, Claus Offe (1985, 1990) ha definido a los nuevos movimientos sociales como aquellos con capacidad de desarrollar amplias alianzas con diversos sectores sociales y políticos: la clase media y otros grupos periféricos tales como estudiantes, amas de casa, jubilados, desempleados y jóvenes con empleos marginales. A pesar de esta evidencia, la vieja izquierda se ha mantenido en la estrategia de reclutar a los obreros, aunque lo que ha encontrado es más bien el apoyo de algunos sectores de la nueva clase media. La derecha, por su parte, ha contado con el respaldo tanto de la tradicional como de la nueva clase media, y en trabajadores no sindicalizados. El estudio de Offe analiza el caso particular de Alemania, sin embargo, es extraordinariamente ilustrativo por la similitud que muestra con la situación de México y varios países de América Latina. En estos últimos casos, durante las décadas de los años setenta y ochenta, el movimiento social urbano buscó desesperadamente una alianza con el movimiento obrero independiente, y en algunas circunstancias lo logró. Así, la alianza entre grupos periféricos y clases medias está siendo actualmente una de las características más notables.

El asunto de las alianzas tiene que ver con dos fenómenos de tipo externo e interno. Por un lado, los cambios estructurales están determinando la constitución de estas conexiones políticas. Durante el periodo de sustitución de importaciones el Estado jugó un papel central en las inversiones productivas y de servicios. Con ello, fue creciendo una importante clase media vinculada al empleo del sector público, aunado al aumento constante de actividades del sector privado comercial y de servicios. Esto explica el peso específico de las clases medias y su creciente fuerza en el escenario político (Roberts, 1995). Por otro lado, las condiciones de la lucha han ido modificando la correlación de fuerzas entre las distintas clases sociales. Si anteriormente había sido la clase obrera o una parte de ella con la que los movimientos sociales se identificaban, ahora sucede, como hemos visto, que esta clase ha perdido su lugar como eje centralizador de las

luchas sociales, en parte debido al control institucional que se ejerce sobre ella, sin la cual otro hubiera sido el desenlace. En esta perspectiva, es importante destacar que cuando la clase obrera ya no pudo sostenerse como sujeto fundamental de transformación, los movimientos sociales perdieron también, en parte, la direccionalidad de la lucha entendida como conflicto de clase, y en tal sentido no debe sorprender que comenzaran a operar con una orientación de tipo más ciudadano

La cuarta y última característica que describo para mostrar los cambios en la morfología de los movimientos sociales urbanos, es que éstos han venido reaccionando contra la intrusión del Estado en sus mundos de vida. En México y en América Latina los movimientos sociales han modificado su actitud respecto al Estado, pero no han dejado de lado la posibilidad de constituirse en alternativa de gobierno, lo han logrado en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Perú, Nicaragua y El Salvador. La teoría de la ciudadanía puede ayudarnos a entender los cambios en esta relación y sobre todo la lucha por el poder en la propia interpretación y significación de los movimientos. Por ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968 ha sido capaz de ofrecer, cuarenta años después, la posibilidad de reivindicar la expansión de una ciudadanía civil, básicamente porque las demandas de antaño, que fueron democracia, tolerancia y reconocimiento, buscaban los valores de una sociedad democrática y un Estado tolerante que escuchara la opinión de la ciudadanía; al no encontrarlos, en ese entonces, los estudiantes definieron al gobierno como un Estado despótico que mataba estudiantes, intolerante, irrespetuoso y autoritario. La respuesta inmediata, como sabemos, fue la represión y el resultado fue un aparente fracaso del movimiento. Pero, a largo plazo, para la sociedad mexicana, el movimiento ha tenido un enorme impacto porque mostró el orden social antidemocrático y rígido del régimen, abriendo la posibilidad, después, de mayores espacios de participación (Tamayo, 1999, 2002, 2010).

Durante toda la década de los setenta y hasta la crisis de 1982, la idea principal del movimiento opositor fue que hubiera una mayor intervención estatal con la cual se otorgaran mayores beneficios sociales por medio de programas de nacionalización de las principales industrias básicas. Al movilizarse y reivindicar derechos colectivos propios de las condiciones de vida, los movimientos sociales de izquierda despertaron a la vida pública, insistieron en los derechos sociales más que cualquier otro, a pesar de que la lucha por los derechos humanos y por mayor participación, vinculados a los conceptos de ciudadanía civil y política, siempre estuvieron presentes (Quiroz, López, Tamayo y García, 2011).

Durante los ochenta, el proyecto de ciudadanía del movimiento popular tuvo la posibilidad de convertirse en programas de gobierno, en parte por la reforma política y la concomitante creación de un sistema de partidos que competían electoralmente. Pasaron de una fase en que sólo defendían derechos sociales a otra donde demandaban el derecho de gobernar. La participación política se incrementó y los principales conflictos se dieron en las contiendas electorales, tanto en cabeceras municipales como en ciudades medias. De este modo, el movimiento social fue planteándose la toma del poder, y ante el proyecto neoliberal, ha logrado unificarse en torno a un programa nacionalista revolucionario, pero desde la izquierda. Por lo demás, un proyecto político que ha venido mostrando que las raíces nacionalistas, en general y de los mexicanos en particular, son aún muy profundas.

Los cambios estructurales de la globalización han impactado fuertemente los procesos internos y las identidades tradicionales, el debilitamiento del Estado y el desmoronamiento de los espacios públicos han cedido al individualismo y al fortalecimiento de la vida privada. Los movimientos sociales, que se unificaban alrededor de atributos totalizadores o universales como el socialismo y la perspectiva de clase, han cambiado sus símbolos de cohesión. La reivindicación sigue planteando la necesidad de una ciudadanía social al mismo tiempo que se orienta hacia los derechos civiles y políticos. De tal suerte que la identidad del ciudadano, expresada en un cierto individualismo, se recrea al rechazar la intervención del Estado y al demandar el control de la sociedad civil sobre los aparatos estatales. Pero al mismo tiempo, esa defensa de los derechos humanos ha sido una apuesta política de carácter universal que está unificando a las poblaciones del mundo; y el derecho por la democracia, que se ha traducido en participación electoral, está convirtiendo al ciudadano en parte de una acción colectiva que busca el poder y cómo controlarlo con otros medios.

#### 5. Finale

Hemos podido constatar el hecho de que la ciudadanía se ha posicionado como un componente de explicación de las nuevas prácticas sociales en las ciudades latinoamericanas. Se constituye como sujeto de transformación social, y como proyecto de disputa de ciudad y de nación.

El cambio en las características del movimiento urbano popular ha tenido que ver con este posicionamiento social, una visión universal del cambio, además de la capacidad de generar amplias redes y alianzas políticas, así como en su relación con el Estado. En cuanto al reposicionamiento social, el giro fue reconsiderarse de ser parte del proletariado a constituirse como ciudadanía. Ha sido en ese sentido un movimiento dinámico, por lo que el estudio de la acción colectiva no debe entenderla como un hecho aislado, sino como un proceso cíclico, que reaparece de acuerdo a determinaciones de tipo estructural y a condiciones históricas y culturales. Esto pasa independientemente de que la orientación tanto política como cultural coincida o no con ciertas expectativas de otras fuerzas sociales y políticas. El hecho es que el movimiento social, de alguna u otra forma, se transformó en este devenir, de estar constituido por movimientos locales a ser un movimiento de carácter nacional, hasta caracterizarse hoy por un número creciente de movimientos sectoriales, quizá muchos atomizados, pero con una mayor capacidad crítica. Los liderazgos también han cambiado, dependiendo del ciclo de desarrollo del movimiento; los socialistas predominaron en la primera mitad de los setenta, los nacionalistas revolucionarios durante 1976, la corriente socialista nuevamente se hizo presente a principios de los ochenta y hasta 1987, después los nacionalistas encabezaron el movimiento durante las elecciones de 1988. Actualmente, estas ideologías han entrado en una profunda crisis desde que los socialistas perdieron credibilidad (Sánchez Vázquez, 2007). Se han erigido, sin embargo, ciertos liderazgos políticos e ideológicos de corte nacionalista revolucionario que en cierta medida han podido unificar algunos fragmentos sociales descontentos. Sin embargo la ciudadanía está aún necesitada de cambios democráticos, que no encuentra ni en la derecha, ni en la izquierda institucionalizada.

En consecuencia, las alianzas políticas, como constatamos, no son las mismas, porque la importancia e influencia de los sectores participantes han cambiado. Al decrecer el papel protagónico del movimiento obrero y en su lugar aparecer una renovada y pujante clase media, modifica la esencia de la alianza histórica. Antes, existía no sólo disposición sino angustia de amplios sectores del movimiento social por vincularse con la clase obrera, hoy se tolera y se busca la participación de la clase media en estos movimientos y en la constitución de pactos políticos. Finalmente, la interpretación del Estado también ha cambiado. El liberalismo y el socialismo coinciden en que éste debe desaparecer para dejar paso a una sociedad moderna liberada de las ataduras de la burocracia. Pero el liberalismo plantea la reducción del Estado para acrecentar el poder del individuo y de la economía de mercado, mientras que el socialismo busca la paulatina desaparición del Estado al conquistarse una sociedad igualitaria sin clases sociales. En cambio, el nacionalismo busca reforzar la participación del Estado en la economía capitalista en aras

de construir un proyecto político de soberanía. En esta dicotomía entre semejanzas y discrepancias de objetivos, con distintos fundamentos, el movimiento ha cambiado no sólo la interpretación que tenía del Estado sino también su relación con él y se ha fraccionado: mientras que algunos lo rechazan plenamente, otros reivindican el control ciudadano de las acciones de gobierno y puede concertar prácticas y políticas públicas con las autoridades.

De esta forma, el movimiento ha pasado de ser una acción colectiva producto de determinaciones estructurales, a ser una acción social y cultural que busca conducir la historicidad, que él mismo produce, es decir, se ha convertido en sujeto. Antes este sujeto se había identificado con la clase obrera, hoy es ciudadano. Pero esta idea de ser ciudadano no debe entenderse como un alejamiento de la solidaridad y la colectividad, porque ciudadanía, en tanto forma de identidad, se relaciona con grupos sociales específicos, clases sociales y demandas específicas, que se reagrupan para defenderse del impacto que genera el ejercicio de derechos ya establecidos de otros sectores, o para exigir la expansión de una ciudadanía que se sustenta en intereses de grupo o de clase.

La práctica de la ciudadanía se revalora pues por procesos de identidad colectiva, se reconstituye en la lucha de clases y puede convertirse en utopía. El movimiento urbano popular ha demostrado esta revaloración. El movimiento ciudadano, en mucho resultado de aquel, es presencia de la globalización. Desde ahí se siguen abriendo nuevos espacios ciudadanos de lucha y resistencia.

## **Bibliografía**

- ALFIE, Miriam, Iván Azuara, Carmen Bueno, Margarita Pérez Negrete y Sergio Tamayo (coords.), 2010, Sistema Mundial y nuevas geografías, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa y unidad Azcapotzalco, México DF, México.
- ALMEYRA, Guillermo, 2003, "Revolución, emancipación, sujeto revolucionario", http://www.nodo50.org/cubasigloxxi/congreso/almeyra\_10abr03.pdf
- ALONSO, Jorge, 1980, Lucha urbana y acumulación de capital, La Casa Chata, México DF, México.
- ALONSO, Jorge (ed.), 1988, Los movimientos sociales en el Valle de México, vol. II, La Casa Chata, México DF, México.
- BARBERO, Jesús Martín, 2003, "Proyectos de modernidad en América Latina", en *Metapolítica*, Número 29-Volúmen 7 mayo/junio 2003, México DF, México.

- BARTRA, Armando, 2009, "Los campesinos contra el ogro omiso. Meandros del movimiento rural en el último cuarto de siglo", en Francis Mestries, Geoffrey Pleyer, Sergio Zermeño (coords.), 2009, Los Movimientos sociales: de lo local a lo global, Anthropos y UAM Azcapotzalco, México DF, M'éxico.
- BARTRA, Armando, 2010, "Contra el milenarismo", en Miriam Alffie, Iván Azuara, Carmen Bueno, Margarita Pérez Negrete y Sergio Tamayo (coords.), *Sistema Mundial y nuevas geografías*, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa y unidad Azcapotzalco, México DF, México.
- CAMOU, Antonio, 2001, (comp.), Los desafíos de la gobernabilidad. FLACSO, IIS-UNAM, y Fondo de Cultura Económica, México DF, México.
- CASTELLS, Manuel, 1978, La cuestión urbana, Siglo XXI, México DF, México.
- CISNEROS, Armando, 2001, *Crítica de los movimientos sociales. Debate sobre la modernidad, la democracia y la igualdad social*, México: Miguel Ángel Porrúa y UAM Azcapotzalco, México DF, México.
- COMBES, Hélène, 2000, "Las manifestaciones callejeras y el Partido de la Revolución democrática en el DF (1997-1999)", *Anuario de Espacios Urbanos*, Historia, Cultura, Diseño, 2000, UAM Azcapotzalco, México DF, México.
- COMBES, Hélène, 2004, "De la polique contestataire à la fabrique partisane. Le cas du Parti de la Révolution Démocratique au Mexique (1989-2000), Thése des Doctorat en Science Politique, Université Paris III-La Sorbonne Nouvelle, Paris, France.
- COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (Conamup), 1983<sup>a</sup>, Acuerdos y resoluciones del primero, segundo y tercer encuentros nacionales, Conamup, México.
- COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (Conamup), 1983<sup>b</sup>, "Resoluciones de la primera reunión inquilinaria del valle de México", *Testimonios*, año1, núm. 1, mayo, Conamup, México.
- COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (Conamup), 1983°, *Principios y estatutos* (folleto), Conamup, México.
- COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (Conamup), 1983<sup>d</sup>, Conclusiones del primer encuentro de mujeres del movimiento urbano popular (folleto), Conamup, México.
- COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR (Conamup), (s.f.), *Mujer* + *lucha* = *Conamup*, Equipo Pueblo, México.
- DAGNINO Evelina, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi (coords), [2006] 2010, *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, FCE, CIESAS y Universidad Veracruzana, México DF, México.

- GARAVITO ELÍAS, Rosa Albina, 2011, "México, sin partido de izquierda", en José Othón Quiroz, Nicolasa López Saavedra, Sergio Tamayo, María García Castro (coords). *Izquierdas: nuevas y viejas.* UAM Azcapotzalco y Eón, México DF, México.
- GARAVITO ELÍAS, Rosa Albina, 1996, "Crisis de fin de régimen y transición a la democracia en México", en Octavio Rodríguez Araujo (coord.), *Transición a la democracia. Diferentes perspectivas*, La Jornada Ediciones y UNAM-CIICH, México DF, México.
- GRASA, Rafael, 2007, "Sociedad civil y Estado en la globalización", *Metapolítica*, Vol.11, Núm.56, noviembre-diciembre de 2007, México DF, México.
- IANNI, Octavio, [1996] 2006, *Teorías de la globalización*, Siglo XXI-UNAM, México DF, México.
- LOJKINE, Jean, 1979, *El marxismo, el Estado y la cuestión urbana*, Siglo XXI, México DF, México.
- LOJKINE, Jean,1977, "Big firm's strategies, urban policy and urban social movements", en M. Harloe (ed.), *Captive cities, studies in the political economy of cities and regions,* John Wiley & Sons, Londres, Inglaterra.
- LÓPEZ MONJARDÍN, Adriana., 1986, *La lucha por los ayuntamientos: una utopía viable*, Siglo XXI Editores e IIS-UNAM, México DFR, México.
- LÓPEZ MONJARDÍN, Adriana, 1989, "Las mil y una micro-rebeliones", *Ciudades 2*, abriljunio, México DF, México.
- MÉNDEZ Y BERRUETA, Luis Humberto y José Othón Quiroz Trejo, 2011, *La continuidad corporativa en México. Sindicalismo, empresarios e izquierda*, Eón Sociales, México DF, México.
- MOCTEZUMA, Pedro, 1983, "Breve semblanza del movimiento urbano popular y la Conamup", *Testimonios*, año 1, núm. 1, mayo, 1983, México DF, México.
- MOCTEZUMA, Pedro y Bernardo Navarro, 1980, "Clase obrera, ejército industrial de reserva y movimientos sociales urbanos de las clases dominadas en México, 1970-1976", *Teoría y Política,* núm. 2, octubre-diciembre, 1980, México DF, México.
- MUNCK Gerardo L., 2003, "Gobernabilidad democrática a comienzos del siglo XXI: una perspectiva latinoamericana", *Revista Mexicana de Sociología*, año 65, No. 3 julioseptiembre, 2003, México DF, México.
- NATAL Alejandro, 2007, "La participación social en la función pública", *Metapolítica* Vol.11, Núm.56, noviembre-diciembre de 2007, México DF, México.
- NOGUEIRA Marco Aurelio, 2004, "La sociedad civil como campo de luchas, como recurso gerencial y como espacio ético", en Dora Kanoussi (comp.). *Gramsci en Río de Janeiro*, BUAP, Antonio Gramsci a.c., Plaza y Valdés editores, México DF, México.

- NOVACK George, "La Ley del Desarrollo Desigual y Combinado en la Sociedad", véase en <a href="http://www.nodo50.org/ciencia\_popular/articulos/Novack.htm">http://www.nodo50.org/ciencia\_popular/articulos/Novack.htm</a>, fecha de consulta: 01 de septiembre de 2011
- OFFE, Claus., 1985, "New social movements: challenging the boundaries of institutional politics", *Social Research*, vol. 52, núm. 4.
- OFFE, Claus, 1990, Contradicciones del Estado de Bienestar, Conaculta y Alianza Editorial, México DF, México.
- PETRAS, James, 1999, *América Latina, de la globalización a la revolución*, Ediciones Homosapiens, México DF, México.
- PRADILLA COBOS, Emilio, 2009, Los territorios del neoliberalismo en América Latina, UAM-X y Miguel Ángel Porrúa, México DF, México.
- PRADILLA COBOS, Emilio, 1984, Contribución a la crítica de la "teoría urbana", Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, México DF, México.
- PRZEWORSKI, Adam, 1985, "Proletariat into a class: The process of class formation", en A. P. Przeworski, A., 1985, *Capitalisms and Social Democracy.* Cambridge University Press, Cambridge, USA.
- QUIROZ José Othón, Nicolasa López Saavedra, Sergio Tamayo, María García Castro (coords), 2011, *Izquierdas: nuevas y viejas*, UAM Azcapotzalco y Eón, México DF, México.
- RAMÍREZ María Clemencia ([2002] 2004), "La política del reconocimiento y la ciudadanía en el Putumayo y la Baja Bota Caucana: el caso del movimiento cocalero de 1996", En Boaventura de Sousa Santos (coord.), *Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa*, FCE, México DF, México.
- RAMÍREZ SÁINZ, Juan Manuel, 1986, "Organizaciones populares y lucha política", *Cuadernos políticos*, número 45, enero-marzo. México DF, México.
- REYGADAS ROBLES Gil Rafael, 2007, "Las organizaciones civiles: entre resistencia y reforma", *Metapolítica,* Vol.11, Núm.56, noviembre-diciembre de 2007, México DF, México.
- ROBERTS, Bryan, 1995, *The Making of Citizens*, Arnold, London, England.
- ROBERTS, Bryan, 2010, "¿Ciudades manejables? La urbanización latinoamericana en el nuevo milenio", en Miriam Alfie, Iván Azuara, Carmen Bueno, Margarita Pérez Negrete y Sergio Tamayo (coords.), Sistema Mundial y nuevas geografías, México: Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa y unidad Azcapotzalco, pp. 251-294.
- RODRÍGUEZ ARAUJO, Octavio, 2002, *Izquierdas e izquierdismos*, Siglo XXI, México DF, México.

- RODRÍGUEZ LAZCANO, Sergio, 2001, "México: el tiempo y el espacio de la confrontación", en Arturo Anguiano (coordinador), 2001, Después del 2 de julio ¿Dónde quedó la transición? Una visión desde la izquierda, UAM Xochimilco México DF, México.
- SÁNCHEZ MEDINA, Mayra, 2010/2011, "Razones epistemológicas en tiempos de estetización. Entre la espectacularidad y el deseo. Razones epistemológicas para pensar el sujeto político", *Memoria 249*, diciembre 2010.enero 2011, México DF, México.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo, 2007, "Actualidad del socialismo", en Elvira Concheiro, Massimo Modonesi, Horacio Crespo (coords.), *El comunismo: otras miradas desde América Latina*. UNAM, CIICH, México DF, México.
- SMITH MARTINS, María Marcia y Víctor Manuel Durand, 1995, "Actores y movimientos sociales urbanos y acceso a la ciudadanía", *Ciudades No. 25*, enero-marzo de 1995, México DF, México.
- TAMAYO, Sergio, 1989, *Vida Digna en las Ciudades,* Gernika y Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México DF, México.
- TAMAYO, Sergio, 1996, *Violencia y no-violencia en los movimientos sociales,* Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, colección de estudios urbanos, México DF, México.
- TAMAYO, Sergio, 1999, Los veinte octubres mexicanos. Ciudadanías e identidades colectivas, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México DF, México.
- TAMAYO, Sergio, 2002, Espacios Ciudadanos, la cultura política de la ciudad de México, Frente del Pueblo, Sociedad Nacional de Estudios Regionales, A.C., Unidad Obrera y Socialista, México DF, México.
- TAMAYO, Sergio, 2010, Crítica de la Ciudadanía, Siglo XXI y UAM, México DF, México.
- TOPALOV, Christian, 1979, La urbanización capitalista. Edicol, México DF, México.
- TOURAINE, Alain, 1988, Return of the actor: social theory in postindustrial society, University of Minnesota Press, Minneapolis, USA.
- TOURAINE, Alain, 1994, *Crítica de la Modernidad,* Fondo de Cultura Económica, México DF, México.
- TOURAINE, Alain, 1995, ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica, México DF, México.
- TOURAINE, Alain, 2005, *Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy*, Paidós, Barcelona, España.

- VERGARA FIGUEROA Abilio y Ricardo Pérez Rovira, 2010, Te han quitado la promesa de ser viento. Imaginarios del ser, de la ciudad y del tiempo de Rockdrigo, Ediciones Navarra, México.
- VERGARA FIGUEROA, Abilio, 2006, El resplandor de la sombra. Imaginación política, producción simbólica, humor y vidas macropolitanas, Ediciones Navarra, México.
- WOOD Charles H. and Roberts Bryan R. (Eds.), 2008, *Rethinking Development in Latin America*, The Penn State University Press, Pennsylvania, USA.
- ZERMEÑO, S., 1996, La sociedad derrotada, el desorden mexicano del fin de siglo, UNAM-Siglo XXI, México DF, México.